



Presentación del curso

Las relaciones modernas se basan en la cooperación entre Estado y sociedad como la mejor forma de practicar la gobernanza, ya que, en la formulación y aplicación de políticas, no sólo participan las autoridades estatales sino también los ciudadanos. Así las cosas, la participación de la ciudadanía en las decisiones públicas y por ende en la gestión gubernamental, se configura como una herramienta fundamental en la consolidación de espacios de articulación y exigencia, para el cumplimiento de las obligaciones gubernamentales en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción, que finalmente redunden en beneficios sociales dirigidos a garantizar la dignidad del ser humano.

Se trata de promover la socialización del Estado a través del desarrollo de las diversas formas de participación en la toma de decisiones, y el crecimiento de una sociedad cada vez más consiente y empoderada y de las organizaciones sociales que ejercen directa o indirectamente el poder político, para dar paso a una ciudadanía activa capaz de poseer y expresar un contenido que proporciona sustancia y operatividad a la soberanía popular.

Desde la perspectiva de derechos humanos y lucha contra la corrupción, la participación nos da la oportunidad de ejercer acciones para la prevención y corrección de comportamientos, actitudes y acciones que sean contrarios a los intereses sociales y a la ética en el desempeño de las funciones públicas en detrimento del ejercicio de los derechos, pero también en las actividades de producción, distribución, intercambio, comercialización y suministro de bienes y servicios necesarios para el desarrollo y calidad de vida de la población, especialmente aquellas realizadas por el sector público.

La participación de la sociedad civil, tiene por finalidad la promoción y desarrollo de una cultura del control social como mecanismo de acción en la vigilancia, supervisión, seguimiento y control de los asuntos públicos que incidan en el bienestar común; a la vez que fomenta el trabajo articulado entre instancias gubernamentales y las diferentes expresiones y organizaciones sociales agrupadas en torno al tema de asegurar que los servidores públicos rindan cuenta de sus actuaciones, desde el deber del Estado de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer este derecho, obtener respuestas por parte de los funcionarios sobre los requerimientos de información y documentación relacionados con su función de control. También, permite que la ciudadanía en general pueda exigir que los funcionarios públicos rindan cuentas de sus actuaciones lo cual permite que las comunidades organizadas tengan un mayor control de la gestión.

En ese sentido, sobre la sociedad civil recae un peso importante, como actor fundamental en la consolidación de los principios y valores propios de la democracia. La participación de la sociedad en el diseño, ejecución y monitoreo de las políticas que finalmente afectan su vida diaria en relación al libre



ejercicio y garantía de sus derechos humanos, se convierte en el norte y objetivo fundamental de los operadores y operadoras gubernamentales.

El papel de esta, representa la posibilidad de minimizar la situación de ventaja en que se encuentran los funcionarios que tienen la posibilidad de abusar del poder que le es conferido por la población en representación de sus intereses, bien sea a través de actos de corrupción menor (que sufren las personas en su interacción con los funcionarios públicos) o corrupción mayor (vinculada a la alta esfera pública donde se formulan las políticas).

Como contrapartida, el Estado debe reconocer la importancia de la participación activa de los ciudadanos para la creación de nuevos conocimientos, así como incentivar un ambiente favorable y establecer un conjunto de reglas capaces de dar sustentabilidad a las prácticas participativas. A la vez, se espera del Estado la transformación de las democracias hacia la adaptación de los sistemas político-administrativos a la diversidad, complejidad y a la dinámica de la sociedad contemporánea, en tanto existen y convergen mayor cantidad de actores ejerciendo influencia.

Objetivo general del curso

Distinguir los principales mecanismos y herramientas con que cuenta la ciudadanía, para ejercer su derecho a la participación en la gestión pública con el fin de minimizar los efectos de la corrupción sobre su cotidianidad.

Objetivos específicos

1. Entender la participación ciudadana como una forma de lucha contra la corrupción
2. Conocer experiencias regionales de participación ciudadana en el control de la corrupción.

Contenido:

Módulo Único. Participación ciudadana en la lucha contra la corrupción; contraloría social de la gestión Pública; Incidencia en políticas públicas.

Duración:

1 semana (10 horas)